



PANORAMA DE UN ORDEN INTERNACIONAL DISFUNCIONAL

La violencia y los conflictos armados continúan afectando la vida de millones de personas en todo el mundo. Hasta mediados de 2023, más de 110 millones de personas se habían visto obligadas a desplazarse debido a la violencia y las guerras, además de por la crisis climática y los desastres. Los 36 conflictos armados activos en distintas regiones, muchos de los cuales enfrentan una respuesta internacional limitada, incapaz de frenar las violaciones de derechos humanos y el creciente deterioro de las condiciones de vida, agravan la ya compleja situación en muchos países y regiones.

La tragedia humana que se está dando en Gaza, Cisjordania y Líbano no está recibiendo una respuesta más allá de las condenas y los lamentos, poniendo en evidencia la aplicación de una doble vara de medir que permite a Israel actuar sin cortapisas evitando sanciones que cualquier otro Estado sufriría si incumpliera tan descaradamente sus obligaciones como potencia ocupante y violara tan abiertamente el derecho internacional y las normas más básicas de la guerra.

Lejos de la atención mediática internacional, Sudán lleva más de un año sumido en una guerra que estalló abiertamente a partir del choque personal entre dos líderes militares deseosos de concentrar todo el poder en sus manos. Y nada indica que, cuando ya las personas fallecidas se acercan a las 200.000, junto a 1,8 millones de refugiadas y 6,7 millones de desplazadas forzadas, la calma pueda llegar a un país que, desde su forzada creación, ha vivido sometido a fracturas internas muy poderosas. Por su parte, Ucrania sigue inmersa en una guerra existencial casi dos años después del arranque de la guerra en Ucrania.

El balance internacional muestra que, no solo se añaden nuevos problemas, sino que se constata que muchos de los ya identificados desde hace tiempo siguen sin provocar una activación suficiente de las capacidades y de la voluntad política tanto de los Gobiernos como de las instituciones multilaterales para ponerles remedio, sin que la movilización de la sociedad civil logre ir más allá de aumentar la sensibilización sobre la gravedad de la situación y de paliar sus efectos más perversos. El alto nivel de inestabilidad reinante sigue alimentando tanto una agenda internacional marcadamente securitaria como el incremento de los gastos dedicados al capítulo de defensa.

ESCALADA DE NECESIDADES HUMANITARIAS CON UN DÉFICIT HISTÓRICO

En este contexto, en el año 2023, ha habido un récord en la demanda de financiación humanitaria solicitada a través de los llamamientos coordinados de la ONU. Sin embargo, a pesar del aumento en las necesidades de financiación, los fondos recaudados para los 45 llamamientos se han estancado con respecto a 2022 dando lugar al mayor déficit desde el comienzo del siglo, consiguiéndose solo el 45 % de los llamamientos de financiación. Se calcula que 363,3 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria en el año 2023, esto es, 37,6 millones más que en el año anterior. Los conflictos, la emergencia climática y los desastres, y las dinámicas económicas son los tres principales factores que generan situaciones de vulnerabilidad y riesgo.

FOTO:

Un grupo de personas sudanesas refugiadas en el campo chadiano de Ecole, en Adré (este de Chad), hacen cola para recoger agua potable de una fuente.

CHAD © MSF

Aunque hubo 45 llamamientos coordinados de la ONU, 10 crisis recibieron cerca de un 43 % de la financiación humanitaria internacional. Solo trece países han figurado entre los diez principales receptores de asistencia humanitaria entre 2018 y 2023 y, de ellos, seis han aparecido todos los años. Tras el comienzo de la guerra en Palestina en octubre de 2023, este país tuvo un incremento muy significativo en la financiación humanitaria del 182 % (de 592 a 1668 millones de dólares), quedando así como el quinto mayor receptor de ayuda.

La diversificación de los donantes sigue siendo limitada, y el compromiso de canalizar una mayor proporción de la financiación a actores locales sigue sin alcanzarse plenamente, a pesar de los avances en este sentido.

Los programas de transferencias monetarias y vales han disminuido levemente en el año 2023, rompiendo con siete años seguidos de crecimiento, aunque se percibe como una normalización tras el incremento extraordinario de 2022.

La diversificación de los donantes sigue siendo limitada

ACCIÓN HUMANITARIA: AVANCES Y RETOS PENDIENTES

Durante los años que analiza el presente informe se han producido algunos avances significativos en el marco normativo y procedimental de la cooperación española, aprobándose los siguientes marcos: la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, el nuevo Estatuto de las personas cooperantes y el VI Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027. No obstante, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta española ha caído un 12,03 %, pasando de 4.086,20 a 3.594,78 millones de euros, rompiendo la senda crecimiento que se había mantenido desde el año 2019. En el ámbito de la acción humanitaria la tendencia ha sido la contraria: se han destinado 213,77 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 34,89 % respecto a 2022. Estas dos variables han hecho que la AH española suponga hoy el 5,95 % del conjunto de la AOD.

En cuanto a la distribución por áreas geográficas de la AH española, Oriente Medio se posiciona como principal receptor, especialmente por la respuesta a la grave situación humanitaria sufrida por la población palestina, seguido de África Subsahariana. Por otra parte, se observa una significativa disminución de los fondos destinados a Ucrania.

La Administración pública central española ha destinado 171,29 millones de euros a acción humanitaria desde 4 ministerios; esta cifra supone un incremento de un 42,63 % respecto a 2022. En el marco del MAUC, 123,41 millones (77,19 %) fueron gestionados por la AECID de los que 109,17 millones lo fueron por la OAH. La acción humanitaria procedente de la cooperación descentralizada ha supuesto un 19,84 % (42,41 millones de euros) respecto al total de la AH pública española (15,69 % autonómica frente al 4,15% de la local).

Los organismos multilaterales han sido las entidades que han gestionado el mayor porcentaje de la AH española, 111,35 millones (52,09 % respecto del total). Seguidos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil, 97,59 millones (45,65 %). Estas cifras muestran que una parte importante del incremento de los fondos de AH en 2023 ha sido absorbida

por el aumento a las contribuciones a organismos internacionales, que han visto incrementar sus fondos en un 52,09 % respecto a 2022, y en menor proporción por las ONG y organizaciones de la sociedad civil, cuyo incremento ha sido de un 18,42 %.

FRONTERAS QUE MATAN

Aproximadamente hay 281 millones de personas en situación de movilidad en todo el mundo. El aumento de la frecuencia, la duración y la intensidad de la violencia y los conflictos armados juegan un papel creciente como origen de la migración forzada.

En este contexto, las políticas migratorias actuales se caracterizan por una orientación marcada por el blindaje de las fronteras físicas, la externalización de los flujos migratorios a terceros países y mayores restricciones para la obtención de la protección internacional, con menores cuotas de aceptación y procedimientos administrativos que se pueden alargar indefinidamente. Prueba de ello es el reforzamiento del papel de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y la aprobación de la Unión Europea del nuevo pacto sobre migración y asilo, planteando un escenario muy preocupante con riesgo de institucionalizar prácticas brutales y represivas.

Las personas en situación de movilidad experimentan la pérdida de acceso a servicios médicos y medicamentos, sufren obstáculos para recibir atención preventiva y ven interrumpidos sus tratamientos en curso, lo que exacerba las vulnerabilidades y riesgos preexistentes. Además, hay que sumar la afectación a la salud física y mental provocada por la violencia a la que se ven sometidas durante la ruta, y por los peligros intrínsecos de atravesar mares, desiertos y selvas, como el caso de la selva del Darién donde MSF ha constatado altos niveles de violencia.

La vulneración constante de los derechos de las personas en situación de movilidad se plasma también en una criminalización cada vez mayor tanto de estas, como de las organizaciones humanitarias que proveen de ayuda.

Frente a este escenario, es vital la creación de rutas migratorias seguras y legales que permitan a las personas en tránsito desplazarse sin riesgo, garantizando que se respetarán sus derechos fundamentales. A su vez, los sistemas de acogida y respuesta en los países de destino y tránsito requieren un fortalecimiento significativo para asegurar su protección.

Las políticas migratorias actuales se caracterizan por el blindaje de las fronteras físicas y la externalización

BARRERAS Y DESAFÍOS PARA LA VACUNACIÓN EN SITUACIONES DE CONFLICTO

La vacunación sigue siendo una de las intervenciones más eficaces para prevenir enfermedades y muertes. Sin embargo, para las personas que viven en situaciones humanitarias y de conflicto, el acceso a la vacunación sistemática, a la vacunación de puesta al día o a las intervenciones necesarias cuando se produce un brote no está garantizada.

A nivel mundial, las tasas de cobertura y los avances para llegar a las personas no vacunadas son —y siempre han sido— enormemente desiguales, y las poblaciones de bajos recursos, remotas y afectadas por conflictos tienen más probabilidades de estar y permanecer sin vacunar o con una vacunación insuficiente: Gaza y Sudán son dos de los contextos de conflicto donde las tasas de cobertura han caído drásticamente.

La falta de un espacio humanitario y del acceso para llevar a cabo actividades de vacunación, las limitaciones en la producción y suministro de vacunas, y la carencia de permisos limitan la capacidad del personal humanitario para llevar a cabo actividades preventivas y reactivas en contextos humanitarios y de conflicto, con graves consecuencias para las poblaciones.

Frente a esto, los donantes, actores de vacunación y Gobiernos deberían asegurar un enfoque coordinado y adaptado para mejorar la cobertura de vacunación y mitigar las restricciones burocráticas y financieras que dificultan este tipo de operaciones. Fomentar el diálogo, aumentar la transparencia e implementar mecanismos incrementa la capacidad de respuesta rápida y eficaz a emergencias y brotes.

Gaza y Sudán ponen de manifiesto, dramáticamente, las limitaciones del sistema humanitario global

DEBATES HUMANITARIOS AL HILO DE LAS GUERRAS DE GAZA Y SUDÁN

Dos de las grandes crisis humanitarias que sufrimos hoy están generando nuevamente reflexiones y dilemas entre los actores humanitarios al ponerse en evidencia el fracaso en la protección de la población civil, las dificultades para el acceso humanitario, la impunidad y falta de rendición de cuentas ante las violaciones del DIH o los derechos humanos, derivados de la inacción internacional: tanto la guerra en Gaza como la situación de Sudán ponen de manifiesto, dramáticamente, las limitaciones, contradicciones e hipocresías del sistema humanitario global.

Ambos conflictos comparten impactos humanitarios similares con violaciones masivas del DIH y crímenes de guerra, impunidad de las partes beligerantes, escasa y sesgada intervención y responsabilidad internacional, consecuencias devastadoras en la población civil (violencia sexual, desplazamiento masivo, falta de acceso a ayuda humanitaria, sanitaria y alimentaria), y ataques contra el personal humanitario.

La severidad del impacto en la población civil, las restricciones al acceso humanitario y los alarmantes ataques contra el personal de ayuda, junto con la inacción de la comunidad internacional, generan una profunda preocupación entre las organizaciones humanitarias lo que ha hecho que se reabran debates en este ámbito.

Las guerras de Gaza y Sudán, entre otras muchas, plantean la cuestión de la relevancia del derecho internacional y de su utilidad en un contexto actual donde la inacción mueve la balanza hacia la parte poderosa. Apoyar las iniciativas de investigación sobre crímenes de guerra y lesa humanidad lideradas por la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como asegurar la rendición de cuentas de quienes los cometen, es fundamental para lograr una aplicación efectiva del derecho internacional.

ATAQUES A LA ACCIÓN HUMANITARIA: ¿LA NUEVA NORMALIDAD?

El ataque al hospital de MSF de Kunduz (Afganistán) en 2015 marcó un punto de inflexión en la percepción global de los ataques contra operaciones médicas y humanitarias. Aunque fue el peor ataque en la historia de MSF, no fue un incidente aislado, ni la última vez que un hospital fue bombardeado desde el aire: los ataques contra la asistencia sanitaria, personal médico y pacientes han sido desde hace mucho tiempo una cruda realidad durante los conflictos armados.

La tragedia de Kunduz llevó a la aprobación de la Resolución 2286 por el Consejo de Seguridad de la ONU, acompañada de una proliferación de iniciativas globales para denunciar y monitorear los ataques contra misiones médicas y humanitarias. Sin embargo, las cifras muestran que esto no se ha traducido en una mayor protección sobre terreno, donde la asistencia sanitaria es una de las víctimas de la guerra, con efectos devastadores para la población civil.

El DIH, el marco jurídico que rige los conflictos armados se fundamenta en el principio de distinción, que establece que las partes en conflicto deben diferenciar en todo momento entre civiles y bienes de carácter civil, por un lado, y objetivos militares y combatientes, por otro. La población civil y los bienes de carácter civil nunca deben ser objeto de ataques directos. No obstante, en contextos como Gaza, Ucrania y Sudán, donde se han registrado algunos de los niveles más altos de ataques en el último año, este principio se ha visto vulnerado.

A pesar de mecanismos de regulación y control de la protección de las misiones médicas y humanitarias, nunca ha habido tanta violencia que afecte a la atención médica como ahora. Esta tendencia preocupa y puede llevar a una «normalización» de estos incidentes, socavando el núcleo mismo del DIH y la protección de la población civil en los conflictos.

**La asistencia
humanitaria es una
de las víctimas de
la guerra, con efectos
devastadores para
la población civil**

RETOS PARA LA ACCIÓN HUMANITARIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

El año 2023 ha supuesto un punto de inflexión en el uso masivo y extendido de herramientas basadas en la IA, especialmente tras la popularización de ChatGPT. Su impacto ha provocado el uso de nuevas herramientas en todos los sectores, y la acción humanitaria no es una excepción, siendo preciso entender las oportunidades y riesgos asociados.

La inteligencia artificial presenta un gran potencial para mejorar la gestión de emergencias, especialmente en la predicción de desastres de origen natural. Al proporcionar pronósticos precisos, la IA aumenta la capacidad de respuesta en regiones con escasos datos registrados. Sus aplicaciones también facilitan las operaciones en otros campos, como el sanitario y la seguridad alimentaria, mediante el análisis de imágenes satelitales y modelos demográficos, así como en la gestión de datos y automatización de tareas.

Sin embargo, su uso conlleva desafíos significativos como la desinformación y manipulación que resta calidad en la comunicación y los mensajes. Además, la privacidad y seguridad de los datos son cuestiones críticas que requieren una evaluación cuidadosa de las consecuencias, adaptando su uso a las realidades humanitarias. Es fundamental considerar el impacto medioambiental de su implementación, lo que podría resultar contradictorio con los compromisos ecológicos establecidos por las plataformas globales.

El sector humanitario se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre aprovechar las oportunidades de este recurso y garantizar que su implementación sea ética y sostenible, asegurando la confidencialidad y transparencia en su uso.

La IA presenta un gran potencial para mejorar la gestión de emergencias, especialmente en la predicción de desastres

FOTO:
Una enfermera prepara una vacuna contra el sarampión en uno de los siete puntos de vacunación puestos en marcha por MSF en el campo de tránsito de Adré (este de Chad).

CHAD © THIBAUT FENDLER